

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO TREINTA DE FAMILIA

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Rad: 11001-31-100-30-2022-00169-00

Clase de proceso: Acción de Tutela

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada la agente oficiosa MARIA SOLANO en favor de **YON RICARDO OJEDA SOLANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.926.307 contra **NUEVA EPS**.

**ANTECEDENTES**

El ciudadano **YON RICARDO OJEDA SOLANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.926.307, a través de la agente oficiosa MARIA SOLANO, presenta acción de tutela contra **NUEVA EPS**, por considerar que se le están vulnerando los derechos fundamentales a **LA VIDA, LA INTEGRIDAD FISICA, LA SALUD** y a la **SEGURIDAD SOCIAL**.

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Refiere que se encuentra afiliado a la NUEVA EPS y que actualmente tiene 33 años, dada su condición: "Trauma contundente en región L1-L2 con posterior paraplejia espástica, sin movilidad desde el nivel medular, apoyo con silla de ruedas, sonda para orinar y uso de pañal", requiere de atención especial por parte de su Entidad Promotora de Salud y por parte del Estado.

Dada su condición, requiere que le sea autorizado el servicio de enfermería o en su defecto ser ubicado en un centro de atención para personas que tengan movilidad nula y paraplejia espástica, con el fin de que le sean realizados los ejercicios que requiere para mejorar su calidad de vida, en razón a que en su hogar no cuenta con los medios económicos para poder sufragar los gastos que esto genera.

Finalmente, solicita que el tratamiento sea autorizado en su totalidad sin asumir costo alguno por copago o cuotas moderadoras, en razón a que no cuenta con los medios económicos para sufragar el tratamiento.

En razón a lo anterior pretende que el Juzgado tutele los derechos fundamentales a **LA VIDA, LA INTEGRIDAD FISICA, LA SALUD** y a la **SEGURIDAD SOCIAL** y que por consiguiente se ordene a la NUEVA EPS ubicar al señor **YON RICARDO OJEDA SOLANO** en un centro de atención para personas que tengan movilidad nula y paraplejia espástica y a su vez, que se ordene a la NUEVA EPS exonerar del pago de copagos o cualquier cuota moderadora en el cien por ciento del tratamiento, incluyendo

los medicamentos, insumos y demás que sean solicitados por los profesionales de la salud.

Solicita a su vez, se preste una atención integral de forma permanente y oportuna.

### **PRUEBAS**

La parte accionante anexa con el escrito tutelar, los siguientes documentos:

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía de YON RICARDO OJEDA SOLANO.
- Copia en un folio de la Historia Clínica de YON RICARDO OJEDA SOLANO.

### **ACTUACIÓN PROCESAL**

1.- Admitida la tutela el 16 de marzo de 2022, se ordenó la notificación a la **NUEVA EPS**, para que en el término de dos (2) días se pronunciara sobre los hechos materia de la presente acción.

2.-El 17 de marzo de 2022, se notificó a través del correo institucional del Juzgado, a la **NUEVA EPS**, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- La accionada **NUEVA EPS** allegó contestación a la acción de tutela.

### **CONSIDERACIONES**

#### **Aspectos preliminares**

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

#### **Naturaleza jurídica de la acción de tutela**

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que

estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

### **Procedencia de la acción de tutela.**

El ciudadano **YON RICARDO OJEDA SOLANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.926.307, a través de la agente oficiosa MARIA SOLANO, se encuentra legitimado por activa para solicitar el amparo del derecho fundamental de **LA VIDA, LA INTEGRIDAD FISICA, LA SALUD** y a la **SEGURIDAD SOCIAL**, en virtud de lo dispuesto en el art. 86 de la Constitución Política de Colombia. *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la **NUEVA EPS**, es el ente a quien se endilga el actuar vulnerador del derecho invocado por el accionante.

### **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado.**

#### **DERECHO A LA VIDA**

“Así, no pueden perderse de vista las dimensiones que adquiere la protección del derecho a la salud, cuando se presenta ligado con el derecho a la vida en condiciones dignas. Se trata de una garantía que cubija tanto los aspectos físicos como los psicológicos de la enfermedad, y que parte de considerar íntegramente a la persona. Esta Corte ha sido clara al señalar que el tratamiento que debe proporcionársele al enfermo, no se reduce al que está dirigido a obtener su curación; cuando se trata de enfermedades crónicas como la diabetes, y aún de las terminales, la persona tiene derecho a recibir todos los cuidados médicos dirigidos a proporcionarle el mayor bienestar posible mientras se produce la muerte, y a paliar las afecciones inevitables de los estados morbosos crónicos, que muchas veces son también degenerativos”. (T-926/1999)

#### **DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL O FISICA**

“La Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el equilibrio psicológico. Ambos por igual deben conservarse y, por ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal -por acción o por omisión- vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de dignidad”. (T-248/2018)

#### **DERECHO A LA SALUD**

El derecho a la salud es un derecho fundamental de todos los habitantes del territorio nacional que debe ser respetado y protegido y, que puede ser invocado a través de la acción de tutela cuando este resultare amenazado o vulnerado, para lo cual, los jueces constitucionales pueden hacer efectiva su protección y restablecer los derechos vulnerados. (T-361/14)

“la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades (...) el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social (...) considerada como una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad”. (Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos)

“Esta Corporación ha establecido en su jurisprudencia que la salud es un derecho fundamental. Por tanto, es obligación del Estado y de los particulares comprometidos con la prestación del servicio público de salud, desarrollar un conjunto de tareas, actividades o actuaciones encaminadas a garantizar el debido amparo de este derecho. El derecho fundamental a la salud, ha sido definido como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.” Esta concepción responde a la necesidad de abarcar las esferas mentales y corporales de la personas, en consecuencia garantizar al individuo una vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta que la salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las demás garantías fundamentales”. (T-184 del 2011 MP. Luis Ernesto Vargas Silva)

## **DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL**

Por otra parte, el derecho a la salud y a la seguridad social se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, que define la seguridad social como “... un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social (...)”

## **DEL CASO EN CONCRETO**

Corresponde a esta Juzgadora determinar si en la presente acción constitucional, la **NUEVA EPS**, se encuentran vulnerando el derecho fundamental de **LA VIDA, LA INTEGRIDAD FISICA, LA SALUD** y a la **SEGURIDAD SOCIAL** al ciudadano **YON RICARDO OJEDA SOLANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.926.307, al negarse al suministro del tratamiento ordenado por el médico tratante.

Como ya en reiteradas oportunidades ha señalado la Honorable Corte Constitucional, las personas en situación de discapacidad gozan de protección constitucional reforzada, imponiendo al Estado diferentes deberes en relación con esta población.

De la jurisprudencia se obtiene, que la Honorable Corte Constitucional en la sentencia T-933 de 2013, en relación a las personas en situación de discapacidad, ha establecido que:

“En virtud del principio de dignidad humana, el derecho a la salud (i) no se limita al bienestar físico sino también al bienestar mental, social y emocional; (ii) es un derecho fundamental que permite la realización de otras garantías superiores como también el desarrollo integral del ser humano; y específicamente (iii) frente a la población con discapacidad el contenido del derecho al goce del más alto nivel posible de salud incluye la rehabilitación, cuyo fin es lograr la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todas las áreas de la vida de este grupo”.

La Ley 1618 de 2013, Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establece en su artículo 9, lo siguiente:

“ARTÍCULO 9o. DERECHO A LA HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN INTEGRAL. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a los procesos de habilitación y rehabilitación integral respetando sus necesidades y posibilidades específicas con el objetivo de lograr y mantener la máxima autonomía e independencia, en su capacidad física, mental y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la habilitación y rehabilitación, se implementarán las siguientes acciones:

1. La Comisión de Regulación en Salud (CRES)\*, definirá mecanismos para que el Sistema General de Seguridad Social y Salud (SGSSS) incorpore dentro de los planes de beneficios obligatorios, la cobertura completa de los servicios de habilitación y rehabilitación integral, a partir de estudios de costo y efectividad que respalden la inclusión. Para la garantía de este derecho se incluirán distintas instituciones como el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud y Protección Social, Artesanías de Colombia, el Sena, y los distintos Ministerios según ofrezcan alternativas y opciones terapéuticas”.

De conformidad con lo anterior, es evidente la imposición legal que se encuentra en cabeza del Sistema General de Seguridad Social y demás institucionales en aras de garantizar a las personas con discapacidad el acceso a procesos de habilitación y rehabilitación integral.

Seguidamente el artículo 10 de la Ley 1618 de 2013, establece, las obligaciones que recaen sobre las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud:

“2. Las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud deberán:

a) Garantizar la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad en todos sus procedimientos, lugares y servicios;

b) Deberán establecer programas de capacitación a sus profesionales y empleados para favorecer los procesos de inclusión de las personas con discapacidad;

c) Garantizar los servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a la residencia de la persona con discapacidad, incluso en las zonas rurales, o en su defecto, facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad y de su acompañante;

d) Establecer programas de atención domiciliaria para la atención integral en salud de las personas con discapacidad;

e) Eliminar cualquier medida, acción o procedimiento administrativo o de otro tipo, que directa o indirectamente dificulte el acceso a los servicios de salud para las personas con discapacidad;" (Subrayado fuera del texto)

De los apartes transcritos, es evidente para este Despacho Judicial las obligaciones que recaen en cabeza de las EPS, sin embargo, de la revisión del escrito tutelar se evidencia que no se aportó constancia alguna u orden médica por medio de la cual el médico tratante establezca la necesidad de que el señor **YON RICARDO OJEDA SOLANO** requiera de un acompañamiento permanente por parte de una profesional de la salud o en su defecto que deba ser ubicado en centro de atención para personas que tengan movilidad nula y paraplejia espástica, en razón a un tratamiento especial a desarrollarse, motivo por el cual, este Estrado Judicial no cuenta con los suficientes elementos de juicio para establecer que la accionada NUEVA EPS se niega a brindar un tratamiento prescrito por el médico tratante.

A su vez, de la contestación a la acción de tutela allegada por la accionada **NUEVA EPS**, no se extrae orden médica alguna o constancia de la petición radicada ante dicha entidad de la cual se haya obtenido una respuesta negativa, en relación a los servicios que refiere la parte accionante requiere.

Ya que tal y como lo establece la Corte en la Sentencia T-345 de 2013:

“La Corte ha resaltado que en el Sistema de Salud, quien tiene la competencia para determinar cuándo una persona requiere un procedimiento, tratamiento, o medicamento para promover, proteger o recuperar su salud es, prima facie, el médico tratante, por estar capacitado para decidir con base en criterios científicos y por ser quien conoce de primera mano y de manera detallada la condición de salud del paciente. La importancia que le ha otorgado la jurisprudencia al concepto del médico tratante se debe a que éste (i) es un profesional científicamente calificado; (ii) es quien conoce de manera íntegra el caso de su paciente y las particularidades que pueden existir respecto de su condición de salud y (iii) es quién actúa en nombre de la entidad que presta el servicio”.

Tesis que se ha continuado conforme lo establecido en sentencia T - 260 de 2020, como se ha indicado:

“Así las cosas, la salud es un derecho fundamental que debe protegerse y ser garantizado a todos los usuarios del Sistema de Seguridad Social, quienes al necesitar del suministro de un servicio están sujetos al criterio del médico tratante mediante orden médica que autorice el mencionado servicio. Tal criterio debe estar basado en información científica, el conocimiento certero de la historia clínica del paciente y en

la mejor evidencia con que se cuente en ese momento. En efecto, cuando una persona acude a su EPS para que esta le suministre un servicio que *requiere*, o *requiere con necesidad*, el fundamento sobre el cual descansa el criterio de necesidad, es que exista orden médica autorizando el servicio.

Así, la Corporación ha señalado que el profesional idóneo para determinar las condiciones de salud de una persona, y el tratamiento que se debe seguir, es el médico tratante. Es su decisión el criterio esencial para establecer cuáles son los servicios de salud a que tienen derecho los usuarios del Sistema General de Seguridad Social. Por lo tanto, la remisión del médico tratante es la forma instituida en nuestro Sistema de Salud para garantizar que los usuarios reciban atención profesional especializada, y que los servicios de salud que solicitan, sean adecuados, y no exista riesgo para la salud, integridad o vida de los usuarios. Es deber de la entidad contar con todos los elementos de pertinencia médica necesarios para fundamentar adecuadamente la decisión de autorizar o no el servicio. Decisión que debe ser, además, comunicada al usuario.”

Solicita la entidad accionada, se deniegue la solicitud del amparo solicitado por la parte accionante, en razón a que no obra orden medica en la que se prescriba el servicio de cuidador, así como tampoco la remisión para ser atendido por un centro especializado, a su vez, se señala que no se ha ocasionado vulneración al señor **YON RICARDO OJEDA SOLANO** al no obrar constancia alguna de que los servicios médicos prescritos por el médico tratante, si esto corresponde a la realidad, hayan sido negados por **NUEVA EPS**.

De conformidad con lo anterior y como se indicó líneas atrás es necesario obtener el criterio médico y científico en el presente asunto en aras de determinar la necesidad de los servicios petitionados por la parte accionante, por lo que no se accederá a lo solicitado a través de la tutela.

Por lo expuesto, no se tutelarán los derechos fundamentales alegados por la parte accionante.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

### **RESUELVE**

**PRIMERO: NO TUTELAR** los derechos fundamentales solicitados por la agente oficiosa en favor del ciudadano **YON RICARDO OJEDA SOLANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 7.926.307, por lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**TERCERO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**CUARTO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

**CUMPLASE,**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS  
JUEZ**

**Firmado Por:**

**Viviana Marcela Porras Porras  
Juez  
Juzgado De Circuito  
Familia 030  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**0ca15033b90e460b2e886067ce00e3a82641eb2263457c306c51c5f5d9b25a84**

Documento generado en 30/03/2022 05:09:56 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**